

Libertad y Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCIÓN No. **0146**

(21 FEB 2023)

"Por la cual se modifica la resolución 006 de 2023, por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación"

El Secretario General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución 1708 del 21 de octubre de 2014 y

Considerando:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el mandato 26 constitucional preceptúa:

"(...) La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social".

Que el artículo 3° de la Ley 152 de 1994, dispone:

"(...) [L]os principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación, entre ellos el de: "k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva; (...)"

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala:

"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Que el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone:

"La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso".

Que el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, estipula:

"La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma".

Que la citada ley en el numeral 3 del artículo 32 define: *"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad".*

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”

Que el numeral 3 del artículo 32 ibidem, define los contratos de prestación de servicios:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Que el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4 9 del Decreto 1082 de 2015, disponen que la modalidad de selección de contratación directa procede para la prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, siempre que se haya demostrado la idoneidad o experiencia del contratista, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo que el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

Que el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los estudios previos y documentos previos deberán contener el valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

Que en relación con la procedencia de la suscripción de contratos de prestación de servicios, la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009 se pronuncia:

*“Por su parte, el contrato de prestación de servicios fue diseñado por el legislador como un contrato estatal que celebran “las entidades estatales para desarrollar actividades **relacionadas con la administración a funcionamiento de la entidad**. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando **dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta** o requieran conocimientos especializados. // En ningún caso estos contratos **generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable**”.*

Que en la misma sentencia, respecto a las particularidades de este tipo de contratos, la Corte señaló:

“En múltiples oportunidades, la Corte Constitucional ha resaltado las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la constitucionalidad del concepto legal de contrato de prestación de servicios, la Corte recordó sus características para efectos de distinguirlo del contrato laboral, así:

(...) El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley”.

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.”

Que los honorarios es uno de los elementos esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que en cada una de las reglamentaciones expedidas por el Ministerio en materia de honorarios, se ha buscado que los contratistas obtengan honorarios de mercado que retribuyan de forma adecuada su esfuerzo personal en las condiciones propias de independencia que se predica de los prestadores de servicios.

Que en el sector estatal en Colombia no existen estudios públicos que den cuenta del establecimiento de variables para la determinación de los honorarios de los contratistas, así como tampoco normativa que contenga, más allá de las disposiciones en relación con los valores máximos a pagar.

Que el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció la manera de realizar el cálculo de la experiencia profesional.

Que las condiciones o calidades del contratista que se definan para el desarrollo del contrato se establecerán conforme a las competencias y responsabilidades connaturales al cumplimiento del objeto contractual.

Que estos criterios deberán tenerse en cuenta por las áreas respectivas al momento de establecer los requisitos de estudios y experiencia, así como las circunstancias y factores del mercado laboral.

Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 11, establece que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para suscribir los contratos respectivos es del jefe o representante de la entidad, quien para el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en virtud de las facultades otorgadas por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, delegó dicha función en el Secretario General, mediante Resolución 1708 de 2014.

Que la fijación de honorarios en el Ministerio incluye una variable de carácter no monetario, asociada a la existencia de retribuciones emocionales de las cuales son beneficiarios los contratistas, principalmente asociadas a la participación en las actividades del Programa de Entorno Laboral Saludable y Sostenible. Este tipo de compensaciones, que en ningún caso implican la asimilación de un contratista con un servidor público, tienen un costo no contabilizado en el marco de la presente fijación de honorarios.

Que la vinculación como contratistas de personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ofrece dificultades en relación con el cumplimiento de requisitos de estudio, considerando que se trata de comunidades con procesos de formación diferentes, que no corresponden con los estándares regulares de la cualificación académica, obstáculo que debe ser removido, de modo que se permita su vinculación en igualdad de condiciones en consonancia con las singularidades de su formación.

Que el Gobierno colombiano ha realizado numerosos esfuerzos con el fin de permitir el acceso de personas con discapacidad al mercado laboral. En materia de contratación pública, el antecedente más cercano lo encontramos en el Decreto 392 de 2018 *“Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Proceso de Contratación en favor de personas con discapacidad”*; acciones afirmativas que no son ajenas a otras modalidades de contratación como las realizadas con personas naturales para prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.

Que si bien, la normativa vigente no exige que las Entidades Estatales deban contar con Tablas de Perfiles y Honorarios para adelantar los estudios de mercado laboral que permitan definir el valor del presupuesto oficial para los contratos de prestación de servicios que requiera adelantar, también lo es, que debe contarse con instrumentos propios que sirvan como referente, que permitan adelantarlos en aplicación y obediencia de los principios constitucionales, legales y propios de la contratación estatal, en armonía con los postulados éticos y morales que deben acompañar la función administrativa.

Que el Decreto 2365 de 2019 adiciona el *“Capítulo 6 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público”*,

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”

y tiene como fin fijar lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población.

Que Colombia Compra Eficiente mediante Circular Externa 004 de 2020, invitó a las Entidades Públicas a incluir cláusulas sociales en los contratos que celebren, tendientes a promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en la ejecución contractual, con la finalidad de adoptar acciones afirmativas en su condición de sujeto especial de protección constitucional.

Que las medidas descritas corresponden a acciones afirmativas propias del estado constitucional colombiano, destinadas, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-932 de 2007, a “(...) remover diferencias fácticas que si bien son reales no deben continuar en un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una sociedad más equitativa y justa”, las cuales pueden ser implementadas a través de los diferentes instrumentos de la gestión pública, entre ellos la contratación estatal.

Que el Ministerio en virtud de los principios de economía, transparencia y responsabilidad identificó la necesidad de establecer la tabla de honorarios de la entidad, para fijar parámetros objetivos para el establecimiento de los honorarios de los contratistas, para lo cual tuvo en cuenta la realidad económica del país, los lineamientos generales de austeridad del gasto público, los índices de referencia estimados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la programación y aprobación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2023, la necesidad de cumplir sus fines misionales y administrativos, la idoneidad de las personas a las que se pretende contratar, la pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio y la reglamentación especial aplicable a cada caso.

Que el perfil del contratista se determina con base en criterios que las áreas técnicas responsables tienen en cuenta al fijar requisitos específicos de estudio, de experiencia, así como las condiciones del mercado, las competencias y responsabilidades inherentes al objeto contractual a desarrollar, así como los costos directos e indirectos que estos contratistas deben asumir en cumplimiento de la ley.

Que es procedente definir parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental, para lo cual se realizaron ejercicios de simulación para garantizar las equivalencias entre experiencia y estudios, y se establecieron factores que permitieron estandarizar los montos de honorarios de referencia como se expone en el Anexo 1. Que analizado el funcionamiento de la entidad, los requerimientos de la misma y el mercado de servicios personales, se evidencia la necesidad de modificar la resolución 006 de 2023, con el fin de democratizar la celebración de contratos de prestación de servicios.

En mérito de lo expuesto,

Resuelve:

Artículo 1. Modificar el artículo 1 de la resolución 006 de 2023, el cual quedará así:

“Artículo 1. Adoptar como referente para determinar los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Fondo Nacional Ambiental, la Tabla incluida en el Anexo No. 1 que hace parte integral de la presente resolución.

Para efectos de la presente Resolución se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

Certificaciones. Los estudios se deben acreditar mediante el título académico o el acta de grado correspondiente, expedidos por instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional colombiano.

En todo caso, bachilleres, técnicos laborales, los técnicos profesionales, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster, doctores y posdoctores, deben acreditar los requisitos para el ejercicio de su formación, de acuerdo con las normas que regulen la respectiva área del conocimiento.

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas tales como, certificaciones laborales, certificaciones de contratos de prestación de servicios, actas de liquidación o de terminación de contratos de prestación de servicios y subsidiariamente declaraciones

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”

extrajuicio para acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de las profesiones liberales o en otras situaciones de carácter excepcional debidamente acreditadas.

Las certificaciones y/o declaraciones extrajuicio deberán contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa contratante.
2. Tiempo de servicio (fecha de inicio — fecha de terminación).
3. Relación de funciones desempeñadas u obligaciones, en los casos de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

Estudios. Se entiende por estudios, los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado, en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de posgrado, en las modalidades de especialización, maestría y doctorado y postdoctorado.

Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

Para los efectos de la presente reglamentación, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada:

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades similares a las obligaciones del contrato.

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional y/o la obtención del título profesional y/o la obtención de la tarjeta profesional, y/o la obtención del registro, de conformidad con la normatividad específica que regule cada área de estudio.

Tratándose de las profesiones u ocupaciones del área de la salud, la experiencia profesional se contará a partir de la inscripción en el RETHUS de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1164 de 2007.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.

Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez de la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o la autoridad competente, conforme a la regulación aplicable a los mismos. Para celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, es necesario presentar el título profesional convalidado ante dicho Ministerio.”

Artículo 2. Modificar el artículo 2 de la Resolución 006 de 2023, el cual quedará así:

“Artículo 2. Para efectos de la presente Resolución se aplicarán las siguientes equivalencias entre estudios y experiencia y viceversa:

1. Un (1) título en formación técnica profesional por título de bachiller y cuatro (4) semestres de educación superior o por título de bachiller y tres (3) años de experiencia relacionada.
2. Un (1) título en formación tecnológica profesional por título de bachiller y seis (6) semestres de educación superior.
3. Un (1) título en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional relacionada.
4. Un (1) título en la modalidad de maestría por tres (3) años de experiencia profesional relacionada.
5. Un (1) título en la modalidad de doctorado o posdoctorado por (4) años de experiencia profesional relacionada.

Parágrafo: Las equivalencias previstas sólo podrán tenerse en cuenta para el cumplimiento de uno solo de los requisitos exigidos, según el tipo de contratista. Las equivalencias solo aplicarán cuando haya relación directa entre

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”

la prestación requerida y postgrado presentado. No se aceptará más de una equivalencia. La valoración de experiencia y estudios se realizará en función de las necesidades de servicio establecidas por la entidad”.



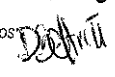
Artículo 3. Modificar en anexo 1. de la resolución 006 de 2023, conforme el anexo de la presente resolución.

Artículo 4. La presente resolución rige a partir de su expedición. Las demás disposiciones de la Resolución 006 de 2023 se mantienen en su integridad.

Comuníquese, publíquese y cúmplase

21 FEB 2023


Ramón Eduardo Villamizar Maldonado
Secretario General

Aprobó: César Eduardo Camargo Ramirez, Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó: Francisco Ayala, Contratista Secretaria general 
Proyectó: Diana Carolina Beltrán Herrera, Coordinadora grupo de contratos 

"Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación"

ANEXO No. 1**PARÁMETROS DE REFERENCIA****HONORARIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Nivel	Título	Experiencia	Desde (meses)	Hasta (meses)	Honorarios mensuales hasta (\$)
Conductor	Bachiller	Relacionada	11	24	2.504.000
		Relacionada	25	48	3.008.000
		Relacionada	49 o más		3.260.000
Asistencial y administrativo	Bachiller	Laboral	0	6	2.126.000
		Relacionada	7	24	2.504.000
		Relacionada	25	48	3.008.000
		Relacionada	49 o más		3.260.000
	Técnicos laborales	Relacionada	0	6	3.650.000
Tecnológicos	Técnico	Laboral	0	6	3.826.000
		Relacionada	7	24	4.204.000
		Relacionada	25	48	4.708.000
		Relacionada	49 o más		4.960.000
	Tecnólogo	Laboral	0	6	3.926.000
		Relacionada	7	24	4.304.000
		Relacionada	25	48	4.808.000
		Relacionada	49 o más		5.060.000
Profesional	Profesional	Profesional	0	6	5.200.000
		Profesional	7	12	5.300.000
		Profesional	13	24	5.500.000
		Profesional	25	36	5.800.000
		Profesional	37	48	6.250.000
		Profesional	49 o más		7.000.000
Posgrado	Especialista	No aplica	0		5.500.000
		Profesional relacionada	1	12	5.800.000
		Profesional relacionada	13	24	6.250.000
		Profesional relacionada	25	36	7.000.000
		Profesional relacionada	37	48	7.750.000
		Profesional relacionada	49 o más		8.500.000
	Magister	No aplica	0		7.000.000
		Profesional relacionada	1	12	7.750.000
		Profesional relacionada	13	24	8.500.000
		Profesional relacionada	25	36	10.000.000
		Profesional relacionada	37	48	11.800.000
		Profesional relacionada	49	60	13.000.000
	Doctor o Posdoctor	Profesional relacionada	61 o más		14.500.000
		No aplica	0		11.800.000
		Profesional relacionada	1	12	13.000.000
		Profesional relacionada	13	24	14.500.000
		Profesional relacionada	25	36	15.500.000
		Profesional relacionada	37	48	16.500.000
Profesional relacionada	49	60	17.500.000		
Profesional relacionada	61 o más		19.000.000		

“Por la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional Ambiental y se definen los criterios para su aplicación”